

Perú

El gélido invierno del fujimorato

César Arias Quincot

El «fujimorato» no fue solo un gobierno, sino un régimen autoritario con apariencias y formas democráticas que se estructuró teniendo como eje los servicios de inteligencia. En la coyuntura del año 2000, el «espíritu de impunidad» condujo a graves excesos: la falsificación masiva de firmas, el manejo de las elecciones, la compra de congresistas opositores. Del otro lado surgió un opositor que no jugó con las reglas del sistema, y que de ese modo aceleró la descomposición del régimen.

Alberto Fujimori se fugó al país de sus ancestros y desde allí envió su renuncia. El Congreso la rechazó y luego de un encendido debate lo destituyó por incapacidad moral. Para muchos fue sorprendente que el mandatario que se autoproclamó valiente, un hombre a quien no le temblaba la mano, hubiera escapado. Quienes lo conocieron más íntimamente no se extrañaron. Pero aquí no terminan las sorpresas. Mirando el panorama político, para muchos observadores y analistas fue sorprendente el acelerado derrumbe de un régimen que aparecía, ante propios y extraños, como sólido. Fujimori controlaba las Fuerzas Armadas, los canales de televisión abierta —es decir la mayor parte de este medio, pues muy pocos peruanos tienen acceso al cable. Por otro lado, el Gobierno tenía el apoyo de los grandes empresarios, de la banca internacional, del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Con tales respaldos, lo que pensara la clase política norteamericana, se decía, no interesaba mucho.

Es por estas razones que pese a las presiones de la OEA, a la marcha de los «cuatro suyos» y al clima general de protesta instalado por los sectores más dinámicos y concientes del país, la mayor parte de los analistas apostaba al mantenimiento del régimen. No se trataba solo de la fuerza del fujimorismo sino de las debilidades de una oposición fraccionada que casi siempre jugó

CÉSAR ARIAS QUINCOT: profesor de Ciencia Política en la Universidad del Pacífico, Lima, y de Periodismo de Investigación y Periodismo y Política en la Unife; autor de diversos artículos y libros sobre la realidad política peruana.

Palabras clave: situación política, elecciones, Fujimori, Toledo, Perú.

precisamente el rol que la cúpula gubernamental le había asignado. Tanto la fortaleza del régimen impuesto a partir de 1992, con el autogolpe de abril, como las debilidades de la oposición eran ciertas. Pero aquellos que apostaban a la duración del fujimorato no percibieron algunas cuestiones que, por no medirse ni cuantificarse, suelen ser vistas con desdén.

El modelo y su crisis

Principalmente por rechazo y temor a la candidatura de Mario Vargas Llosa es que Fujimori resultó electo en 1990. Como carecía de un partido organizado, empezó a construir en medio de las sombras un «poder informal» y semi secreto, gracias al super-asesor Vladimiro Ilich Montesinos (un abogado y capitán retirado proveniente de una familia leninista, como lo muestran sus nombres). El eje de ese poder fue el reforzado SIN (Servicio de Inteligencia Nacional) que sirvió, en primer lugar, para controlar las Fuerzas Armadas mediante el espionaje interno y el chantaje. Después del autogolpe el Poder Judicial pasó a estar controlado, lo mismo ocurrió con el Ministerio Público. Montesinos conocía muy bien el Palacio de Justicia, habiendo ejercido la abogacía defendiendo a narcotraficantes y militares acusados de violar los derechos humanos durante la lucha antisubversiva.

Contando con el respaldo popular y amparado por los mandos de las FFAA, Fujimori pudo aislar a los líderes de los partidos políticos y proyectar una imagen de fortaleza e invencibilidad. Sin embargo fue el rechazo internacional, principalmente de Estados Unidos, lo que lo obligó a dar por terminada la fase abiertamente dictatorial e iniciar un proceso de pseudoapertura democrática que, en verdad, fue la construcción de un nuevo modelo político caracterizado por las formas democrático-liberales con esencia autoritaria.

La Constitución de 1993 tomó mucho de la Carta democrática de 1979. Como novedades estableció la reelección presidencial inmediata por una sola vez, y, sacralizó el neoliberalismo económico, olvidando además los derechos sociales. El Legislativo pasó a ser unicameral y se fijó la representación en 120 congresistas (esto para justificar la demagogia presidencial en torno de lo oneroso que resultaba mantener un Congreso). Se creó un Tribunal Constitucional compuesto por siete miembros y se estableció que para declarar la inconstitucionalidad de una norma se requería de seis votos. Como la mayoría del Congreso impuso a dos fujimoristas, el Gobierno podía sentirse seguro. En la práctica pronto se vieron los límites de la democracia bajo el fujimorato: en primer lugar el Legislativo nombró comisiones interventoras del Ministerio Público y el Poder Judicial con el pretexto de «moralizar» y hacer más eficientes dichas instituciones. La poca independencia y los restos de autonomía sobrevivientes de las intervenciones posteriores al autogolpe empezaron a esfumarse.

El régimen le dio gran importancia al control de la televisión. Los avisos del Estado fueron un mecanismo de influencia. La cercanía espiritual de muchos empresarios mediáticos respecto de un régimen que derrotaba al terro-

rismo, eliminaba la hiperinflación y se declaraba «fondomonetarista», permitió que la televisión fuera, cuando menos, complaciente. A esto se sumó la práctica de operativos psicosociales, es decir, la fabricación de noticias para distraer a la opinión pública de cuestiones políticamente sensibles (v.g. una Virgen que lloraba, o los vínculos de gente de la farándula con narcotraficantes). Como complemento, en los medios de comunicación los partidos fueron satanizados y reducidos a su mínima expresión, favoreciendo la aparición de grupos independientes sin coherencia doctrinaria ni planteamientos serios. Por otra parte, el Legislativo degradó su nivel en los 90. Se estableció un pago a legisladores que superaba en mucho el salario promedio de un funcionario del Estado o de la actividad privada: 7 veces el sueldo de un general, 28 veces el ingreso promedio de un maestro. En parte por esta razón *candidatear* se convirtió en una feria. El voto preferencial convirtió las candidaturas en inversiones y hubo gente que ingresó a las listas sin tener vocación política, afán de servicio y menos aún claridad de metas.

Las sólidas mayorías que el fujimorismo conquistó en el Congreso Constituyente y en 1995 fueron un elemento muy importante para reducir el poder del Congreso y hacerlo abdicar de sus responsabilidades. En muy pocas ocasiones se investigaron asuntos que podrían incomodar al Ejecutivo, y, lo más grave, no tuvieron los congresos fujimoristas rubor alguno en aprobar normas contrarias a la Constitución sancionada e impuesta por el régimen en 1993. Situaciones graves que hieren el Estado de derecho fueron aprobadas por las mayorías fujimoristas imponiendo la fuerza del número. Como ejemplo podemos citar la defenestración de tres magistrados del Tribunal Constitucional, por oponerse a otra ley inconstitucional –la denominada «ley de interpretación auténtica»¹– que permitiría la re-reelección de Fujimori.

El original modelo del fujimorato no termina en un Legislativo sumiso y un SIN todopoderoso. El Poder Judicial y el Ministerio Público fueron desnaturalizados para ser utilizados como armas políticas contra opositores considerados peligrosos. Esto llegó a niveles patéticos con el caso Ivcher. Baruch Ivcher Bronstein es un empresario que llegó a ser accionista mayoritario de un canal de TV. Entre 1990 y 1996, Ivcher influyó en la línea periodística del canal para darle contenidos progubernamentales a los programas informativos. Por razones nunca explicadas con claridad, en un momento introdujo modificaciones en la planta periodística, lo cual condujo a un radical cambio de línea. La unidad de investigación produjo muy serios «destapes»; por ejemplo una audaz reportera entrevistó, en el hospital militar, a la agente de inteligencia Leonor La Rosa bárbaramente torturada. También hizo públicas facturas con los millonarios ingresos que declaraba Montesinos (cerca de 100.000 dólares mensuales); probó la interferencia telefónica efectuada por el SIN a periodistas y políticos de oposición; etc.

1. Para la mayoría del Congreso el presidente Fujimori había sido electo en 1990, cuando regía la Carta de 1979, y por lo tanto en 1995 no fue reelecto, sino solo electo. La de 2000 sería su única reelección.

Luego que dos accionistas minoritarios del canal expresaran, ante el comandante general del ejército, su descontento con la línea impuesta por Ivcher, un funcionario del Ministerio del Interior emitió una ilegal resolución despojando a Ivcher de su nacionalidad peruana². La ilegalidad no fue problema para el sometido Poder Judicial: en pocas semanas se decidió entregar el control del canal a los accionistas minoritarios, con lo cual la línea periodística cambió radicalmente (para esto se valieron de una ley dictada durante el gobierno militar que señala que solo los peruanos pueden dirigir medios de comunicación). Usando ampliamente los recursos del Estado, teniendo la simpatía y el apoyo de la inmensa mayoría de la TV, y contando con el respaldo mayoritario de un pueblo que aún recordaba el desorden del periodo anterior a 1991, Fujimori fue reelecto en 1995. Entre entonces y 2000, el mandatario y su entorno buscaron crear las condiciones para la re-reelección. Aquí está la explicación de la mayor parte de ilegalidades y atropellos perpetrados luego de 1995. El exceso de confianza y la soberbia generarían nuevos atropellos en un contexto diferente luego de enero de 2000, caracterizado por una vigilancia más estrecha por parte de la comunidad internacional y un liderazgo opositor capaz de jugar fuera de las reglas impuestas por el fujimorato.

Del «cholo de Harvard» a los tráfugas

Para que el modelo político del fujimorato funcionara bien se requería una oposición funcional. Fraccionada y con conflictos internos, centrada en grupos independientes carentes de organización, desideologizados y creyentes en la lógica neoliberal. Como corolario, esa oposición debía jugar en la cancha oficialista, con el reglamento preparado por los amigos de Fujimori, con jueces de línea y árbitros tramposos y parcializados. Si alguien se quejaba le gritaban «llorón» a los cuatro vientos, usando la televisión y la prensa amarillista.

En diciembre de 1997, promediando el segundo mandato de Fujimori, cuando la mayoría oficialista aprobó la «ley del fraude» que le daba el voto a magistrados provisionales en la elección del Jurado de Elecciones³, buena parte de los opositores colocó cartelones contra la maniobra en pleno recinto del Congreso. Los partidarios de una oposición suave protestaron contra las «actitudes violentas y bochornosas» y a los pocos días se restableció la calma.

Pese a que una consecuencia lógica del diagnóstico de la mayor parte de la oposición —«el fujimorato es una dictadura»— era la candidatura única, ésta no se produjo por cuestiones de política menuda que revelaban la falta de grandeza de los líderes opositores. En esos días los candidatos más fuertes de la oposición eran Alberto Andrade (alcalde de Lima) y Luis Castañeda

2. Baruch Ivcher, de origen israelí, se nacionalizó en la primera mitad de los años 80, mediante una resolución suprema firmada por Belaúnde. Una resolución directoral no puede anular una suprema.

3. El Jurado Nacional de Elecciones es el tribunal electoral y está compuesto por magistrados. Siempre fue un organismo independiente; para debilitarlo el fujimorismo le dio el voto a magistrados que, por carecer de estabilidad, suelen ser manipulados por el Poder Ejecutivo.

(ex-presidente del Instituto de Seguridad Social). Las encuestas daban como tercero a Alejandro Toledo, a quien cierta prensa había bautizado en 1995 «el cholo de Harvard». Mientras los dos primeros evitaban una decisión, Toledo anunció que estaba dispuesto a dar apoyo a cualquiera de los dos sin pedir nada a cambio. Esto lo beneficiaría más adelante. De otro lado, los rasgos étnicos de Toledo, el ser un hombre que se hizo a sí mismo, que llegó a importantes universidades en EEUU y a tener una esposa atractiva, «gringa» e intelectualmente brillante, le daba una imagen de cholo exitoso, es decir, lo que la mayoría de los pobres quisiera ser. Los medios fujimoristas empeñados en su guerra con Andrade y Castañeda, no vieron la peligrosidad de Toledo quien, como Fujimori en 1990, subía rápido en las encuestas. Cuando reaccionaron era muy tarde, pues faltaba poco para la primera vuelta electoral. El régimen se había debilitado en los sectores que tenían capacidad para informarse (leer diarios no amarillos o ver televisión por cable) debido a la masiva falsificación de firmas (1.200.000) realizada para inscribir a uno de los grupos que apoyaba a Fujimori, y, sobre todo, la lenidad del Ministerio Público cuya investigación terminó acusando solo a quienes hicieron la denuncia.

La votación y el conteo de votos presentaron signos que parecían extraídos de un cuento de realismo mágico: las incoherentes presentaciones del jefe de la ONPE –oficina encargada de organizar y dirigir los procesos electorales–; los votos engrasados; las cédulas de votación recortadas donde debía aparecer Toledo; las acciones ilegales de autoridades políticas y militares; las denuncias de miembros de las FFAA con documento electoral; las extravagantes situaciones vividas en las computadoras de la ONPE⁴; y, por último, el extraño viraje de los resultados luego del anuncio de las encuestas a boca de urna favoreciendo a Toledo. El «cholo de Harvard» hizo algo que implicaba salir de la lógica impuesta por el fujimorismo: la noche de las elecciones encabezó una marcha a Palacio e inició jornadas callejeras de protesta que se generalizaron en todo el país. A esto se sumó la presión de EEUU y la Comunidad Europea. La ONPE cedió y anunció que Fujimori no había superado 50% de los votos, por lo cual habría segunda vuelta. En las semanas siguientes hubo esfuerzos para lograr que el proceso electoral se pareciera a una elección democrática. Toledo planteó la apertura de la televisión, dado que la mayor parte de la TV abierta no solo no informaba sobre las actividades y planteos opositores, sino que ni siquiera aceptaba presentar avisos pagados.

Las personas más informadas recordaron no solo que aquellos que manejaban Frecuencia Latina (uno de los canales de mayor presencia en sectores populares) eran los accionistas minoritarios a quienes el Gobierno les entregó el manejo del canal gracias a un conjunto de acciones ilegales, por lo tanto, el fin del fujimorato suponía el retorno de Ivcher y la posibilidad de que éste los enjuiciara penalmente. También podrían recordar que al principal accionista de América Televisión se le sorprendió conversando con Montesinos acerca de la línea informativa del canal. Más tarde ese mismo personaje apa-

4. En el Perú los militares y policías carecen de derecho al sufragio.

recería acompañando al congresista «tránsfuga» Alberto Kouri en el video en que Montesinos lo sobornaba.

El punto más fuerte en las discusiones previas a la segunda vuelta electoral fue el sistema de cómputo de la ONPE que la misión de observadores de la OEA quiso analizar. Para ello se pidió un plazo que implicaba una postergación del proceso electoral por unos 10 días. Cuando la ONPE se negó, los observadores decidieron su retiro, Toledo anunció lo mismo y llamó a sus partidarios a no votar o asistir y viciar el voto con la frase: «No al fraude». Era la tercera vez que el «cholo de Harvard» se salía de las reglas del sistema fujimorista: la primera vez fue iniciar las marchas contra el fraude y contra la victoria de Fujimori en la primera vuelta, la segunda fue el retiro del diálogo con el partido de gobierno, la tercera fue la negativa a ir a una elección cuestionada. La segunda vuelta electoral no tuvo interés alguno: Fujimori iba solo, los observadores de la OEA, del Centro Carter y el Instituto Nacional Demócrata se habían retirado. Como era previsible la elección fue cuestionada por toda la oposición, parte importante de la sociedad civil organizada y algunos medios de comunicación. En la OEA, EEUU planteó la aplicación de la resolución 1.080, pero terminó retirando su propuesta debido a la falta de consenso: Brasil, México y Venezuela encabezaron la oposición a la línea dura contra el gobierno peruano. Se optó por un camino moderado: exigirle al gobierno del Perú una democratización. La agenda de la OEA iba al fondo del asunto: reforma de los servicios de inteligencia, eliminación de las comisiones interventoras en el Poder Judicial y Ministerio Público, reestructuración del sistema electoral y solución a los problemas de libertad de expresión. En resumen, se buscaba la restauración del Estado de derecho. Sin embargo el problema de fondo era si le sería posible a Fujimori gobernar un país en el cual existía un Estado de derecho. La respuesta vino con la compra de congresistas tránsfugas.

La crisis final

Entre julio y septiembre de 2000 se inició la agonía del fujimorato. Luego de la segunda vuelta, el Ejecutivo inició un trabajo para obtener mayoría en el Legislativo. El resultado electoral le daba al oficialismo 52 congresistas –para tener mayoría se requieren 61. En las semanas posteriores al anuncio del escrutinio, corrieron rumores sobre algunos que cambiarían de bando, plegándose al oficialismo. La prensa de oposición los llamó *tránsfugas*, palabra muy poco conocida y menos utilizada en el léxico corriente, pero que ganó enorme popularidad al ser esgrimida como injuria. Al aproximarse el 28 de julio (día de la Independencia y fecha en que el presidente se entregaría el poder a sí mismo) fue conocida la existencia de 17 legisladores tránsfugas. En momentos en que los congresistas recién electos juraban sus cargos hubo escenas bochornosas, cuando representantes de la oposición los insultaron y les arrojaron monedas. Toledo declaró que Alberto Kouri se había «vendido por dinero», y éste lo denunció penalmente sin sospechar que a las pocas semanas aparecería recibiendo más de 20.000 dólares de manos de Montesinos.

Toledo organizó una gran marcha de protesta llamada «De los cuatro suyos», en recuerdo de la división del Imperio de los incas (*tawuantinsuyo* significa «imperio de los cuatro suyos»). Los días 26 y 27 de julio hubo marchas en diversas zonas de Lima, el 26 hubo una marcha de mujeres organizadas y, a su término, habló el ex-presidente Belaúnde Terry. La marcha del día 27 culminó en una gigantesca concentración (para algunos la más grande de nuestra historia) en la cual el orador de fondo fue Toledo. El 28, día en que se juramentó Fujimori, los manifestantes fueron atacados con bombas lacrimógenas y algunas oficinas públicas fueron incendiadas. El saldo final fue de seis muertos, decenas de heridos y numerosos detenidos. La oposición culpó al SIN de los incendios y, por tanto, de las muertes. Las marchas y la polémica posterior encendieron el debate político y tuvieron como resultado ir erosionando la legitimidad política del fujimorato. De este modo el clima político estaba recalentado, pero el oficialismo quería creer que su poder era sólido y la oposición frágil. Algunos analistas señalaron que el intento opositor de enfrentar al oficialismo de modo radical había fracasado: el Gobierno estaba en plena contraofensiva y había logrado satanizar a la «oposición extrema» que encarnaba Toledo. Se decía que el Gobierno había podido atraer a la oposición minimalista nombrando presidente del Consejo de Ministros al ex-candidato opositor Federico Salas. Esto era una verdad a medias, dado que durante casi toda la campaña Salas se había caracterizado por su ambigüedad frente al Gobierno y su dureza con lo que denominaba «oposición radical». Si algunos pensaron –y unos pocos dijeron– que el nombramiento de Salas indicaba el inicio de un fujimorismo aperturista pronto se verían desengañados.

El preanuncio de la crisis definitiva se produjo con la presencia de Fujimori en una conferencia de prensa. Sentado al lado del cuestionado Montesinos, el presidente anunció que su gobierno había descubierto y desarticulado una banda de traficantes de armas que le quería vender 10.000 fusiles a las FARC de Colombia. Fujimori incluso se permitió darle consejos burlones a la secretaria de Estado estadounidense, dando a entender que los norteamericanos gastaban mucho en un país incapaz de controlar subversivos y ni siquiera querían visitar a quienes, como el Perú, daba muestras de gran eficacia en este aspecto. Pero a los pocos días llegaron los desmentidos de Jordania y Colombia, así el tema se volvió contra el Gobierno. Pronto se divulgó entre los periodistas una versión ominosa y siniestra: el oficialismo trataba de culpar a personas de menor rango porque el propio Montesinos estaba metido en el tráfico de armas y las autoridades de EEUU lo sabían. Antes que este asunto terminara de aclararse el congresista Olivera hizo público el video en que Montesinos pagaba al tráfuga Kouri. A los pocos días, Fujimori anunció que convocaba a nuevas elecciones en las que no participaría: se había cumplido el programa máximo de la oposición, y había triunfado la oposición radical que no quiso aceptar el juego del fujimorato.

Del mismo modo, es posible concluir que fallaron los analistas y políticos supuestamente «realistas» que hablaban de no confundir deseos con realidades, aconsejando una oposición super-moderada, modesta y minimalista. El

problema es que ese «realismo» no tomó en cuenta factores que podríamos llamar «invisibles». Esto quiere decir que no se vio, por ejemplo, que en toda la historia del Perú nunca un presidente duró más de 11 años. Tampoco se quiso ver que los sectores más dinámicos y políticamente concientes se estaban movilizandando contra el régimen y le negaban legitimidad, ni que en las FFAA, sobre todo en los estratégicos mandos medios (de capitán a teniente coronel), había un gran descontento. A ello hay que sumar que se obvió algo fundamental: no era posible que EEUU tolerara que se le quisiera sabotear el Plan Colombia. En conclusión el fujimorato era como el gigante del sueño de Nabucodonosor interpretado por Daniel: era enorme pero tenía pies de barro. Luego del anuncio presidencial la descomposición del régimen se aceleró. Un signo de ello fue la fuga de Montesinos a Panamá, acompañado por un séquito en el cual se incluían militares en actividad. Panamá aceptó la presencia del ex-asesor debido a las presiones de la OEA, EEUU y algunos países latinoamericanos que argumentaron que existía la amenaza de un «golpe montesinista» en el Perú. Pero a casi un mes de su fuga, regresó clandestinamente. Se dice que llegó en una avioneta y aterrizó en una base aérea a unos 250 Km al sur de Lima. Pero nadie lo ha visto realmente. En los días siguientes el propio Fujimori encabezó una aparatosa búsqueda. A mediados de noviembre el Congreso, cuya composición cambió dado que algunos tránsfugas abandonaron el oficialismo, destituyó a la presidenta y eligió a Valentín Paniagua (ex-ministro, ex-diputado y brillante jurista) para presidirlo. Esa misma noche el Congreso restituyó a los magistrados del Tribunal Constitucional cesados en 1997. La historia no terminó allí; el presidente del Consejo de Ministros anunció la renuncia de Fujimori cuando éste se hallaba en Japón. Esta fuga terminó de liquidar al fujimorato: los mismos ministros que lo habían servido sosteniendo las más disparatadas tesis mostraron indignación. Y lo propio hicieron algunos congresistas de la mayoría, aquellos que, durante años, habían usado toda clase de sofismas para justificar lo injustificable. En ese ambiente de crisis final, cuando el búnker fujimorista se hundía, sus partidarias más fieles y emotivas pronunciaron encendidos discursos en su defensa. El fujimorato terminó con alguna pena y ninguna gloria cuando el Congreso rechazó la renuncia presidencial y destituyó al mandatario por «incapacidad moral».

Como en Europa del Este, el fujimorato se derrumbó con una combinación de presiones externas (en especial norteamericanas) y movilizaciones internas protagonizadas principalmente por una juventud que despertó en 1997, oponiéndose en las calles a la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional, es decir, se manifestaban contra el fin de cualquier apariencia de Estado de derecho: el Tribunal Constitucional era la única instancia independiente capaz de frenar atropellos. Desde ese momento la movilización no se detuvo. También jugaron un rol decisivo los periodistas que combatieron sin tregua al régimen autoritario, en especial aquellos que, al investigar, sacaron a la luz los trapos sucios. Y muy especialmente el Perú le debe este avance democrático a Alejandro Toledo, el infatigable opositor, el líder capaz de movilizar a cientos de miles y mantener viva la llama de la resistencia cuando las voces pretendidamente sensatas decían que todo estaba perdido.